

# RELACION DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DICTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1990

DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (\*)

**Sentencia núm. 54/90, de 28 de marzo (núm. Reg. 1.082/85), «BOE» número 92.**

**Tipo de procedimiento:** Conflicto de competencia.

**Ponente:** Sr. Rubio Llorente.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Junta de Galicia.

**Acto impugnado:** Circulares de la D. G. de Farmacia. Ministerio de Sanidad y Consumo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 149.1.3, 5, 10, 16 y 29 de la CE; 33 del E. de A. de Galicia; 63.1 de la LOTC; 43 de la Ley General de la Salud y 338 de la LECr.

**Cuestiones analizadas:** Objeto del conflicto de competencias; las circulares sin eficacia externa como objeto de conflicto. La inspección y control de la distribución y dispensación de estupefacientes como competencia controvertida; las competencias del Estado en Sanidad («Bases y coordinación general»), Seguridad pública, Relaciones internacionales y Comercio exterior no comprenden la precitada competencia. La competencia para el depósito, análisis y, en su caso, destrucción de los estupefacientes decomisados y que, como piezas de convicción, pasen a disposición de la autoridad judicial co-

---

(\*) La presente relación de sentencias ha sido elaborada por los profesores Aguiar de Luque, González Ayala, Elvira Perales, Aranda, Pajares y Sánchez Saudinós.

responde al Estado por su conexión con las competencias estatales en materia de Seguridad pública y Administración de Justicia.

**Precedentes jurisprudenciales:** Objeto del conflicto de competencias: sentencias núms. 57/83, de 28 de junio; 110/83, de 29 de noviembre; 56/84, de 7 de mayo; 143/85, de 24 de octubre, y 88/89, de 11 de mayo.

**Sentencia núm. 55/90, de 28 de marzo (núms. Reg. 487/86 y 158, 495 y 510/87), «BOE» núm. 92.**

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Piñero.

**Fallo:** Estimatorio.

**Promotor:** Juzgado de Instrucción.

**Acto impugnado:** Art. 8.1 de la LO 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

**Preceptos de referencia:** Arts. 14, 24.1 y 2, 104 y 163 de la CE, y 35 de la LOTC.

**Cuestiones analizadas:** Interpretación del término «Fallo» judicial en el marco de la cuestión de inconstitucionalidad. Las alteraciones de las reglas competenciales para conocer eventuales responsabilidades penales en que puedan incurrir los agentes policiales en el ejercicio de sus funciones: no vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley; no es contrario al principio de igualdad en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva; la acumulación de la función instructora y juzgadora que tales alteraciones entrañan constituye una vulneración del derecho al proceso debido.

**Precedentes jurisprudenciales:** a) El término «Fallo» y la cuestión de inconstitucionalidad: sentencias núms. 76/1982, de 14 de diciembre, y 54/1983, de 21 de junio.

b) Acumulación de la función juzgadora e instructora: sentencias números 145/1988, de 12 de julio, y 164/1988, de 26 de septiembre.

#### **Comentario:**

Al margen de cuestiones previas de carácter procesal (significado de la expresión «Fallo» judicial del art. 163 CE), el problema de fondo del litigio

queda claramente delimitado al comienzo del FJ 2.º de la sentencia; se trata de examinar la constitucionalidad de las alteraciones competenciales que introduce la ley impugnada en los procesos incoados para conocer de las eventuales responsabilidades penales en que puedan haber incurrido los agentes policiales en actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

La sentencia, con apoyo en jurisprudencia precedente, constata con facilidad que tales nuevas reglas no vulneran el derecho al juez predeterminado por la ley y con argumentación igualmente breve, dada la fácil extrapolación de la doctrina sentada en relación al proceso monitorio, declara contrario a la Constitución la acumulación en la Audiencia, que la norma impugnada impone, de las fases de instrucción y de conocimiento y fallo en este tipo de causas.

Precisamente por esto último parece innecesario el extenso *excursus* justificador de la constitucionalidad de la norma impugnada en relación al principio de igualdad proyectado sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, justificación largamente argumentada en base al artículo 104 CE, al papel de las Fuerzas de Policía y el no siempre fácil equilibrio de la regulación de éstas.

**Sentencia núm. 56/90, de 29 de marzo (núms. Reg. 859, 861, 864 y 870/1985), «BOE» núm. 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de inconstitucionalidad.

**Ponentes:** Sres. Díaz Eimil, López Guerra y Gimeno Sendra (voto particular del Sr. Gimeno Sendra).

**Fallo:** Estimatorio e interpretativo.

**Actores:** Parlamento y Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, Junta de Galicia y Gobierno Vasco.

**Acto impugnado:** Determinados preceptos de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

**Preceptos de referencia:** Arts. 117, 123, 147.1.c), 148.1, 149.1.5, 152.1 y 162.1 de la CE; 3.1, 14.1.a), 34.1 y 35.3 del E. de A. del País Vasco; 18.1 y 2, 19 y 20.1.a) del E. de A. de Cataluña; 20.2 y 21 del E. de A. de Galicia y 32.2 de la LOTC.

**Cuestiones analizadas:** Legitimación de las CC. AA. en el recurso de inconstitucionalidad. CC. AA. y Administración de Justicia; conceptos amplio

y estricto de la Administración de Justicia; cláusulas subrogatorias de los E. de A. en favor de las instancias autonómicas de las competencias gubernamentales en materia de Administración de Justicia; competencias autonómicas participativas en materia de demarcaciones judiciales; ámbito jurisdiccional de los Tribunales Superiores de Justicia.

### **Comentario:**

La fundamentación jurídica de la presente sentencia se estructura en torno a cinco grandes bloques, que, dada la complejidad de la argumentación, serán los que se glosen en el presente comentario:

a) *Legitimación de los recurrentes.* El Tribunal reitera la posición más abierta y favorable a la legitimación de los órganos autonómicos para interponer recursos de inconstitucionalidad mantenida en la sentencia 199/87.

b) *Cláusulas subrogatorias de las competencias gubernamentales.* El objeto del presente apartado, que se desarrolla en los FFJJ 4 a 13, es analizar el alcance y significado de las denominadas cláusulas subrogatorias, esto es, aquellos preceptos de los E. de A. que confieren a las instancias autonómicas competencias que, en materia de Administración de Justicia, ostenta el Gobierno, según la LOPJ. El Tribunal estima que ello sólo es posible en la medida en que se acepte, junto a una acepción estricta de la expresión Administración de Justicia (función jurisdiccional), una significación amplia que admita la asunción de facultades por las CC. AA.; sólo de este modo será posible compatibilizar la declaración constitucional de exclusividad y los preceptos estatutarios que asignan competencias a las CC. AA. En todo caso, no es posible olvidar que estas cláusulas subrogatorias, aunque constitucionalmente legítimas, están sometidas a diversos límites: las CC. AA. no pueden entrar en ningún caso en el núcleo de la Administración de Justicia en sentido estricto o en aquellas facultades encomendadas a órganos distintos del Gobierno; por su propia naturaleza de funciones gubernamentales, son competencias ejecutivas o reglamentarias, pero nunca ejecutivas, y quedan excluidas las facultades de alcance supracomunitario.

A la luz de tales consideraciones generales, se examinan las impugnaciones específicas dirigidas contra la LOPJ por vulneración de las cláusulas subrogatorias, agrupadas en tres categorías: estatuto y régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia, las que afectan a los medios materiales y otras impugnaciones diversas. En este contexto se declarará inconstitucional el artículo 37.4 de la LOPJ.

c) *Competencias autonómicas en materia de «demarcación judicial».* El Tribunal, en este punto, constata las dificultades de interpretar la regulación

*per saltum*, que en su día llevaron a cabo los E. de A. en ausencia de la LOPJ a la que, en primer término, difiere el tema el artículo 152 de la CE. Para proceder entonces a examinar los preceptos impugnados es preciso aclarar lo que ha de entenderse por «organización de las demarcaciones judiciales» a que alude tal precepto; en síntesis, el Tribunal estima que dicho precepto permite que las CC. AA. asuman competencias participativas en la organización de las demarcaciones judiciales, pero no en el establecimiento de la planta judicial, y, en todo caso, esa participación ha de referirse a demarcaciones judiciales diferentes de la provincial y autonómica (no disponibles para los poderes autonómicos), y siempre en el marco de la LOPJ.

d) *Competencias de órganos jurisdiccionales*. El tercer núcleo de objeciones que los recurrentes oponen a la ley impugnada se refiere al modo como se atribuye la competencia de un lado al TS para conocer de recursos extraordinarios en materia civil, de la casación por infracciones constitucionales y de la casación en el orden contencioso, y de otro, a la A. N. en materia penal. No es posible sintetizar en unas líneas una argumentación que, dada la heterogeneidad de problemas que plantea, ha de ser irremediablemente prolija. Baste señalar en todo caso que ninguno de tales supuestos da pie para una declaración de inconstitucionalidad, si bien en lo referente a la A. N. el voto particular discrepa de la argumentación y fallo.

**Sentencia núm. 57/90, de 29 de marzo (núm. Reg. 1.298/87), «BOE» número 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Decreto Foral de la Diputación de Vizcaya.

**Preceptos de referencia:** Art. 14 CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad; su aplicación al personal transferido de una Administración a otra.

**Sentencia núm. 58/90, de 29 de marzo (núm. Reg. 1.599/87), «BOE» número 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. López Guerra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 CE y 64 de la LJCA.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y emplazamiento personal y directo.

**Sentencia núm. 59/90, de 29 de marzo (núm. Reg. 1.639/87), «BOE» número 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Gimeno Sendra.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 19 y 21 de la CE; 44.1.b) de la LOTC; 169 y 246 del CP; 5.8 y ss. de la LO 9/83, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.

**Cuestiones analizadas:** Significado de la prohibición de conocer los hechos que dieron lugar al proceso en el recurso de amparo. Derecho de reunión; límites; libertad de circulación *versus* derecho de reunión.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias 18/1981, de 2 de junio; 2/1982, de 29 de enero; 36/82, de 16 de junio; 191/85, de 4 de octubre, y 85/88, de 28 de abril.

**Sentencia núm. 60/90, de 29 de marzo (núm. Reg. 845/90), «BOE» número 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e incongruencia de las resoluciones judiciales.

**Sentencia núm. 61/90, de 29 de marzo (núm. Reg. 370/88), «BOE» número 107.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

**Preceptos de referencia:** Art. 25.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de legalidad en materia de Derecho sancionador.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias 3/88, de 21 de enero, y 219/89, de 21 de diciembre.

**Sentencia núm. 62/90, de 30 de marzo (núms. Reg. 505, 548 y 588/1989), «BOE» núm. 109.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de inconstitucionalidad.

**Ponentes:** Sres. Díaz Eimil, López Guerra y Gimeno Sendra.

**Fallo:** Estimatorio e interpretativo.

**Actores:** Parlamento y Consejo Ejecutivo de la Generalidad, Diputación General y Cortes de Aragón.

**Acto impugnado:** Diversos preceptos de la Ley 38/88, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

**Preceptos de referencia:** Arts. 117, 123, 149.1.5 y 8, 152.1 y 162.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Legitimación de las CC. AA. en el recurso de inconstitucionalidad. CC. AA. y Administración de Justicia; conceptos amplio y estricto de la Administración de Justicia; cláusulas subrogatorias de los E. de A. en favor de las instancias autonómicas de las competencias gubernamentales en materia de Administración de Justicia; competencias autonómicas participativas en materia de demarcaciones judiciales.

**Comentario:**

Aunque las cuestiones concretas aquí examinadas sean otras, lo que da lugar a interesantes consideraciones de Derecho procesal, los presupuestos constitucionales de que parte de la presente sentencia son los mismos que en la sentencia 56/90, y a ella hay inexcusablemente que remitirse.

**Sentencia núm. 63/90, de 2 de abril (núm. Reg. 409/88), «BOE» núm. 109.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Bereijo.

**Fallo:** Estimatorio.



**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva.

**Sentencia núm. 64/90, de 5 de abril (núm. Reg. 125/85), «BOE» núm. 109.**

**Tipo de procedimiento:** Conflicto positivo de competencia (1).

**Ponente:** Sr. García-Mon y González-Regueral.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Gobierno de la Nación.

**Acto impugnado:** Art. 16 del Decreto 151/1984, de la Junta de Galicia.

**Preceptos de referencia:** Arts. 2, 38, 138, 139.1 y 2 y 149.1.1.<sup>a</sup> de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Unicidad del orden económico nacional: mercado único; libre circulación de personas y bienes por el territorio nacional; igualdad de los españoles en las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica; solidaridad interterritorial.

**Precedentes jurisprudenciales:** Abundantes sobre casi todas estas cuestiones. Sobre la unicidad del orden económico nacional, las sentencias 1/82, de 28 de enero; 87/85, de 16 de julio, y 29/86, de 20 de febrero. Con relación a la exigencia constitucional de mercado único, las sentencias 96/84, de 19 de octubre, y 88/86, de 1 de julio. Relacionadas con la libre circulación de personas y bienes por el territorio español, las sentencias 36/81, de 12 de noviembre, y 88/86, de 1 de julio. Sobre la igualdad de los españoles en las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica, las sentencias 37/81, de 16 de noviembre; 96/84, de 19 de octubre, y 88/86, de 1 de julio. Finalmente, acerca de la solidaridad interterritorial, las sentencias 4/81, de 2 de febrero; 25/81, de 14 de julio; 18/82, de 4 de mayo; 11/86, de 26 de enero, y 96/86, de 10 de julio.

---

(1) En realidad, se trata de una impugnación de disposiciones autonómicas de rango infralegal, por razones no competenciales, de las previstas en el artículo 161.2 de la CE, y que, según el artículo 77 de la LOTC, se sustancia por el procedimiento previsto para los conflictos positivos de competencia.

**Sentencia núm. 65/90, de 5 de abril (núm. Reg. 1.166/86), «BOE» núm. 109.**

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Bereijo.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Promotor:** Magistratura de Trabajo.

**Acto impugnado:** Art. 52 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 28 de diciembre de 1983; Disposición Adicional 29.<sup>a</sup> de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 30 de diciembre de 1984, y art. 3.2 de la Ley 53/84, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

**Preceptos de referencia:** Arts. 1, 9.3, 14, 31.1, 33.3, 39.1, 40, 41, 50, 106.2 y 134.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Límites materiales de la Ley General de Presupuestos. Irretroactividad y seguridad jurídica. Derecho de propiedad. Seguridad Social suficiente. Protección a la tercera edad. Responsabilidad patrimonial de la Administración.

**Precedentes jurisprudenciales:** 1) Ambito material de la Ley General de Presupuestos: sentencia núm. 65/87, de 21 de mayo. 2) Sometimiento de los funcionarios al régimen general de compatibilidades: sentencias núm. 178/1989, de 2 de noviembre, y la anteriormente citada. 3) Principios de interdicción de la arbitrariedad y justicia: sentencia núm. 108/86, de 29 de julio. 4) Principio de seguridad jurídica: sentencias núms. 99/87, de 11 de junio, y 178/89, de 2 de noviembre. 5) Irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales y derecho de propiedad: las mencionadas sentencias núms. 65/87 y 178/89. 6) Naturaleza esencial del sistema de Seguridad Social: la misma sentencia núm. 65/87.

**Sentencia núm. 66/90, de 5 de abril (núm. Reg. 1.367/86), «BOE» núm. 109.**

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Bereijo.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Promotor:** Magistratura de Trabajo.

**Acto impugnado:** Art. 52 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 28 de diciembre de 1983; Disposición Adicional 29.<sup>a</sup> de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 30 de diciembre de 1984, y art. 3.2 de la Ley 53/84, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

**Preceptos de referencia:** Arts. 1, 9.3, 14, 31.1, 33.3, 39.1, 40, 41, 50, 106.2 y 134.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Límites materiales de la Ley General de Presupuestos. Irretroactividad y seguridad jurídica. Derecho de propiedad. Seguridad Social suficiente. Protección a la tercera edad. Responsabilidad patrimonial de la Administración.

**Precedentes jurisprudenciales:** Véase la sentencia anterior.

**Comentario:**

Sentencia con idéntico contenido al de la anterior sentencia núm. 65/90, de 5 de abril.

**Sentencia núm. 67/90, de 5 de abril (núm. Reg. 1.368/86), «BOE» núm. 109.**

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Bereijo.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Promotor:** Magistratura de Trabajo.

**Acto impugnado:** Art. 52 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 28 de diciembre de 1983; Disposición Adicional 29.<sup>a</sup> de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 30 de diciembre de 1984, y art. 3.2 de la Ley 53/84, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

**Preceptos de referencia:** Arts. 1, 9.3, 14, 31.1, 33.3, 39.1, 40, 41, 50, 106.2 y 134.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Límites materiales de la Ley General de Presupuestos. Irretroactividad y seguridad jurídica. Derecho de propiedad. Seguridad social suficiente. Protección a la tercera edad. Responsabilidad patrimonial de la Administración.

**Precedentes jurisprudenciales:** Véase la sentencia núm. 65/90, de 5 de abril.

**Comentario:**

Sentencia con idéntico contenido al de las anteriores sentencias números 65/90, de 5 de abril, y 66/90, de 5 de abril.

**Sentencia núm. 68/90, de 5 de abril (núm. Reg. 1.046/87), «BOE» núm. 109.**

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Bereijo.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Promotor:** Audiencia Nacional.

**Acto impugnado:** Art. 16.1 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

**Preceptos de referencia:** Art. 14 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Igualdad ante la ley: necesaria justificación del trato diferenciado.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núm. 66/83, de 5 de agosto; 253/88, de 20 de diciembre; 260/88, de 21 de diciembre, entre otras.

**Comentario:**

Se reitera jurisprudencia anterior en el sentido de que el legislador goza de un amplio margen para establecer el sistema de incompatibilidades de los funcionarios públicos, apreciándose, además, como justificadas las diferencias de tratamiento existentes entre los funcionarios retribuidos por arancel y los restantes funcionarios públicos.

**Sentencia núm. 69/90, de 5 de abril (núm. Reg. 1.341/87), «BOE» núm. 109.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 14 y 24.1 de la CE y 884.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e inadmisión de recurso de casación; significado de las exigencias formales; la imposición de formalismos enervantes como obstáculo a dicho derecho.

**Precedentes jurisprudenciales:** Numerosísimos; véase la sentencia número 7/89, de 19 de enero, y la jurisprudencia que allí se cita.

**Sentencia núm. 70/90, de 5 de abril (núm. Reg. 1.761/87), «BOE» núm. 109.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Gimeno Sendra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva. Condiciones del auto de procesamiento. Indefensión por defectos de forma de resoluciones judiciales; motivaciones judiciales.

**Precedentes jurisprudenciales:** Tanto para la competencia del TC en la materia, como para los requisitos del Auto de procesamiento, véase la sen-

tencia núm. 66/89, de 17 de abril. En relación con la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, entre otras, las sentencias núms. 56/87, de 14 de mayo, y 36/89, de 14 de febrero.

**Sentencia núm. 71/90, de 5 de abril (núms. Reg. 1.767/87 y 6/88, acumulados), «BOE» núm. 109.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Desestimatorio (voto particular del Sr. Gimeno Sendra).

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Resoluciones del Tribunal Tutelar de Menores, Tribunal de Apelación de la Dirección General de Protección Jurídica del Menor y Juzgado de Primera Instancia.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1, 117.5 y 120.1 de la CE; Decreto de 11 de junio de 1948, de Legislación de Menores, y 44.1.a) y 50.1.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

**Cuestiones analizadas:** Vigencia de la legislación sobre Tribunal de Menores. El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. El derecho a la defensa y asistencia de letrado. El derecho a un proceso público con todas las garantías.

**Precedentes jurisprudenciales:** Peculiar naturaleza del procedimiento de los Tribunales Tutelares de Menores: son muestra los Autos de 22 de abril de 1987 (RA 1.279/86) y 21 de julio de 1988 (RA 1.625/87). Imposibilidad de intervención de procurador y abogado en determinados procedimientos: sentencia núm. 47/87, de 22 de abril.

#### **Comentario:**

Es de destacar el voto particular formulado contra diversos fundamentos jurídicos y contra el fallo de la sentencia, habida cuenta de la existencia de tres cuestiones de inconstitucionalidad, admitidas a trámite y sin resolver en la fecha, suscitadas por diversos jueces de menores, en torno a la posible inconstitucionalidad de distintas normas procesales del Decreto de 11 de ju-

nio de 1948, y que sirvieron para fundamentar el presente recurso. Como se señala en este voto, hubiera sido más adecuado suspender la deliberación de la sentencia hasta que recayese un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad de tales preceptos. No obstante, los pasos a seguir se han invertido, y la fundamentación jurídica de la sentencia pone ya de manifiesto el punto de vista del Tribunal en relación con la compatibilidad entre la Constitución y las normas objeto de duda, de lo cual puede fácilmente deducirse cuál ha de ser el resultado de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, al menos en lo que hace referencia a los puntos analizados: la especialización de una determinada categoría de órganos judiciales no sólo no contradice el principio de unidad jurisdiccional, sino que encuentra su desarrollo y protección natural en la especialidad de los procedimientos que ante los mismos se siguen; admisión de determinadas excepciones al carácter público de las actuaciones judiciales; la no imperatividad de la presencia de abogados en el procedimiento tutelar de menores...

**Sentencia núm. 72/90, de 23 de abril (núm. Reg. 191/88), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rubio Llorente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Territorial.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 de la CE y 64 de la Ley Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y necesidad de emplazamiento directo y personal.

**Precedentes jurisprudenciales:** Entre otras muchas, véanse las sentencias núms. 9/81, de 31 de marzo; 63/82, de 20 de octubre; 22/83, de 23 de marzo; 119/84, de 7 de diciembre; 150/86, de 27 de noviembre, y 251/1988, de 20 de diciembre.

**Sentencia núm. 73/90, de 23 de abril (núm. Reg. 396/88), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 de la CE y 1.692.4 y 1.710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e interpretación de los requisitos procesales acorde con su finalidad; el recurso de casación.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 81/86, de 20 de junio; 103/86, de 16 de julio, y 129/86, de 28 de octubre.

**Comentario:**

Destaca de la sentencia la interpretación que realiza el Tribunal en torno al alcance y sentido del art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalando que el mismo no tiene por objeto dar entrada en el recurso de casación a toda denuncia indiscriminada de error en la apreciación de los hechos, sino tan sólo a aquellas que vengan fundadas, para acreditar el error, en prueba documental, que, obrando en los autos, no haya sido tenida en cuenta por el juzgador al realizar su juicio de valoraciones probatorias.

**Sentencia núm. 74/90, de 23 de abril (núm. Reg. 4.767/88), «BOE» número 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

**Fallo:** Estimatorio.



**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 9.3, 14 y 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** El derecho a la tutela judicial efectiva: indefensión por insuficiencia de motivación de sentencias e incongruencia de las mismas.

**Precedentes jurisprudenciales:** En relación con los defectos de falta o insuficiencia de motivación de sentencias: el Auto del 23 de septiembre de 1989 y la sentencia núm. 55/87, de 13 de mayo.

**Sentencia núm. 75/90, de 26 de abril (núm. Reg. 585/85), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Conflicto positivo de competencia.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Gobierno de la Nación.

**Acto impugnado:** Orden de 29 de marzo de 1985, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

**Preceptos de referencia:** Arts. 149.1.1.º y 149.1.18.º de la CE; 15.1.1.º y 19.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 5 del Decreto 375/74, de 7 de febrero.

**Cuestiones analizadas:** Competencia en materia de acceso a los Cuerpos de funcionarios docentes y en materia de enseñanza. La normativa básica de ingreso en la función pública. El establecimiento de «condiciones básicas» que garanticen la igualdad de todos los españoles en el acceso a la función pública docente.

**Precedentes jurisprudenciales:** Tanto sobre el título competencial de las disposiciones y actos relativos a la función pública docente como sobre la competencia de la Comunidad Autónoma para ordenar la función pública docente en el propio territorio: sentencia núm. 48/85, de 28 de marzo. En relación con la determinación del contenido de lo básico en el régimen de acceso al funcionariado: sentencia núm. 102/85, de 4 de octubre. En cuanto

a la compatibilidad entre la diversidad, fruto de las autonomías, y el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad: sentencia número 37/81.

**Sentencia núm. 76/90, de 26 de abril (núms. Reg. 695/85; 889 y 1.960/88), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de inconstitucionalidad y cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Desestimatorio e interpretativo.

**Actores:** Sesenta senadores.

**Promotor:** Audiencia Territorial de Valencia y Tribunal Supremo.

**Acto impugnado:** Determinados preceptos de la Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación parcial de la Ley General Tributaria.

**Preceptos de referencia:** Arts. 9.3, 14, 18.1, 24.1, 24.2, 25.1, 31.1, 35.1 de la CE; 38.1, 58.2.b), 77.1, 80.4, 81.1.a), 82.b) y h), 83.3.f), 86, 140.c) y 145.3 de la LGT en la redacción dada a los mismos por la Ley 10/1985.

**Cuestiones analizadas:** Responsabilidad en materia de infracciones tributarias; principios de seguridad jurídica y de legalidad sancionadora; derecho a la presunción de inocencia; principio de igualdad; derecho a la intimidad personal.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 110/1984, de 26 de noviembre; 175/87, de 4 de noviembre; 19/88, de 16 de febrero; 22/90, de 15 de febrero.

**Comentario:**

La presente sentencia desestimatoria impone, sin embargo, la interpretación conforme a sus fundamentos jurídicos de algunos de los preceptos indicados. En concreto, en relación con la sanción de suspensión a funcionarios y profesionales oficiales, establece que la misma resulta accesoria de la de multa y, en consecuencia, no supone duplicidad, justificándose la primera por el especial deber de colaboración con la Administración, que afecta a

aquéllos. Por su parte, la conformidad del sujeto pasivo como criterio para graduar las sanciones tributarias conforme al procedimiento previsto en el artículo 82.h) de la LGT es necesario entenderla como medio para graduar *in melius* la correspondiente sanción, por tanto, como un beneficio ofrecido al contribuyente. Por último, las Actas de la Inspección de Tributos incorporadas al expediente sancionador gozan de igual relevancia que el resto de los medios de prueba admitidos en derecho en vía judicial. Junto a estos aspectos conviene poner de relieve que en el sistema de responsabilidad en materias tributarias sigue rigiendo el principio de culpabilidad, debiendo rechazarse un régimen de responsabilidad objetiva, tanto en el caso de responsabilidad individual como en el de la solidaria.

**Sentencia núm. 77/90, de 26 de abril (núm. Reg. 1.380/87), «BOE» número 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Resolución del Consejo de Ministros.

**Preceptos de referencia:** Art. 14 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Igualdad entre diversos Cuerpos de funcionarios.

**Precedentes jurisprudenciales:** Entre otras, sentencias núms. 7/1984, de 25 de enero; 99/1984, de 5 de noviembre.

**Comentario:**

El Tribunal reitera su doctrina de que la titulación exigida para el ingreso en un Cuerpo no es el único criterio objetivo que el legislador o la Administración pueden ponderar a efectos retributivos de los distintos Cuerpos de funcionarios, sino que cabe, asimismo, contemplar otros factores de diferenciación.

**Sentencia núm. 78/90, de 26 de abril (núm. Reg. 52/88), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Gimeno Sendra.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Magistratura de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 14 de la CE; 13.2 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección del Desempleo, y 7.3 del Real Decreto 625/85.

**Cuestiones analizadas:** Control de legalidad de normas reglamentarias; alcance de la potestad reglamentaria y su relación con la ley; principio de igualdad y privación reglamentaria de un beneficio legalmente reconocido.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia núm. 209/1987, de 22 de diciembre.

**Sentencia núm. 79/90, de 26 de abril (núm. Reg. 82/88), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 de la CE; 5, 6 y 7 LO 10/1980, de 11 de noviembre.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva; error en la condición de parte.

**Precedentes jurisprudenciales:** Numerosos; por todos, sentencia número 200/88, de 26 de octubre.

**Sentencia 80/90, de 26 de abril (núm. Reg. 802/89), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. García-Mon y González-Regueral.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Auto de Juzgado de lo Social.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1, 117.3 y 123.1 de la CE; 227, párrafo segundo, de la LPL.

**Cuestiones analizadas:** Ejecución provisional de sentencias.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia núm. 58/1983, de 29 de junio.

**Comentario:**

El derecho a la ejecución o no ejecución provisional de las sentencias no es un derecho fundamental, sino un derecho establecido por la legislación ordinaria, por lo que la decisión acerca de su procedencia o improcedencia corresponde a los órganos judiciales.

**Sentencia núm. 81/90, de 4 de mayo (núm. Reg. 315/88), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rubio Llorente.

**Fallo:** Parcialmente estimatorio.

**Actor:** Ministerio Fiscal.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 de la CE y 90.5 ET.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a tutela judicial efectiva; legitimación para impugnar convenios colectivos.

**Precedentes jurisprudenciales:** En especial, sentencias núms. 4/1987, de 23 de enero, y 47/88, de 21 de marzo.

**Comentario:**

El Tribunal Constitucional ya había tenido ocasión de pronunciarse con anterioridad acerca de la falta de legitimación de los trabajadores individuales para demandar en abstracto la nulidad, anulabilidad o aplicación genérica de los conflictos colectivos. En el presente recurso precisa cómo, por el contrario, aquéllos están legitimados para ejercitar acciones precisas contra aquellas normas del convenio que le causan una lesión concreta de sus derechos o intereses, lo cual, en su caso, pudiera dar lugar a la valoración de alguna cláusula del convenio.

**Sentencia núm. 82/90, de 4 de mayo (núm. Reg. 319/88), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De los Mozos y De los Mozos.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Art. 14 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Discriminación en la aplicación de la ley.

**Precedentes jurisprudenciales:** Entre otros, sentencias núms. 39/1985, de 11 de marzo, y 161/89, de 16 de octubre.

**Sentencia núm. 83/90, de 4 de mayo (núm. Reg. 506/88), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Bereijo.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Resolución del Departamento de Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña.

**Preceptos de referencia:** Arts. 14 y 25.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de legalidad en materia sancionatoria.

**Precedentes jurisprudenciales:** Entre otros, sentencias núms. 42/1987, de 7 de abril; 3/88, de 21 de enero; 101/88, de 8 de junio, y 29/89, de 6 de febrero.

**Sentencia núm. 84/90, de 4 de mayo (núm. Reg. 603/88), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Presunción de inocencia.

**Precedentes jurisprudenciales:** Por todos, sentencia núm. 107/1989, de 8 de junio.

**Sentencia núm. 85/90, de 5 de mayo (núm. Reg. 770/88), «BOE» núm. 129.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponentes:** Sres. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

**Fallo:** Parcialmente estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Ausencia de resolución judicial en Autos de Juzgado de Primera Instancia.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.2 de la CE; 741 a 761 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 126.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y deficiencias estructurales de la Administración de Justicia.

**Precedentes jurisprudenciales:** Entre los más recientes, sentencias números 223/88, de 25 de noviembre; 50/89, de 21 de febrero, y 81/89, de 8 de mayo.

**Sentencia núm. 86/90, de 17 de mayo (núm. Reg. 711/85), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Conflicto positivo de competencia.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Gobierno de la Nación.

**Acto impugnado:** Orden de 30 de mayo de 1985 del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, por la que se establecen las normas para proveer las plazas asignadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco por el sistema de ingreso directo entre graduados procedentes de la undécima promoción del Plan Experimental de 1971, en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de Educación General Básica del País Vasco.

**Preceptos de referencia:** Arts. 149.1.1.<sup>a</sup> y 149.1.18.<sup>a</sup> de la CE; 10.4 y 16 del Estatuto de Autonomía Vasco.

**Cuestiones analizadas:** Igualdad de derechos de los españoles en relación con el acceso a la función pública docente.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia sustancialmente idéntica a la núm. 75/90, 26 de abril; véase jurisprudencia allí citada.



**Sentencia núm. 87/90, de 22 de mayo (núm. Reg. 712/85), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Conflicto positivo de competencia.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Gobierno de la Nación.

**Acto impugnado:** Orden de 27 de mayo de 1985 de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Galicia.

**Preceptos de referencia:** Art. 149.1.1.<sup>a</sup> y 18.<sup>a</sup> de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Igualdad de derechos de los españoles en relación con el acceso a la función pública docente.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia sustancialmente idéntica a las sentencias núms. 75/90, de 26 de abril, y 86/90, de 17 de mayo; véase jurisprudencia allí citada.

**Sentencia núm. 88/90, de 22 de mayo (núm. Reg. 791/85), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Conflicto positivo de competencia.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Gobierno de la Nación.

**Acto impugnado:** Orden de 28 de mayo de 1985 de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

**Preceptos de referencia:** Art. 149.1.1.<sup>a</sup> y 18.<sup>a</sup> de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Igualdad de derechos de los españoles en relación con el acceso a la función pública docente.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia sustancialmente idéntica a las sentencias núms. 75/90, de 26 de abril; 86/90, de 17 de mayo, y 87/90, de 22 de mayo; véase jurisprudencia allí citada.

**Sentencia núm. 89/90, de 22 de mayo (núm. Reg. 829/85), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Conflicto positivo de competencia.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Gobierno de la Nación.

**Acto impugnado:** Orden de 17 de junio de 1985 del Departamento de Enseñanza del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.

**Preceptos de referencia:** Art. 149.1.1.<sup>a</sup> y 18.<sup>a</sup> de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Igualdad de derechos de los españoles en relación con el acceso a la función pública docente.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia sustancialmente idéntica a las sentencias núms. 75/90, de 26 de abril; 86/90, de 17 de mayo; 87/90, de 22 de mayo, y 88/90, de 22 de mayo; véase jurisprudencia allí citada.

**Sentencia núm. 90/90, de 23 de mayo (núm. Reg. 1.551/87), «BOE» número 147.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia y providencia de Magistratura de Trabajo (hoy Juzgado de lo Social).

**Preceptos de referencia:** Arts. 14 y 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad en la aplicación de la ley. Derecho a la tutela judicial efectiva: control de constitucionalidad de la selección de la norma jurídica aplicable al caso concreto.

**Precedentes jurisprudenciales:** Son muy numerosos sobre ambas cuestiones. En cuanto al principio de igualdad, y entre las más recientes, las sentencias núms. 189/87, de 24 de noviembre; 117/88, de 20 de noviembre; 161/1989, de 16 de octubre, y 180/89, de 3 de noviembre. Respecto a la tutela judicial efectiva, en relación con la incorrecta selección de la norma aplicable al caso concreto, las sentencias núms. 50/84, de 5 de abril; 23/87, de 23 de febrero; 23/88, de 22 de febrero; 178/88, de 10 de octubre, y 211/88, de 10 de noviembre.

**Sentencia núm. 91/90, de 23 de mayo (núm. Reg. 112/88), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. López Guerra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 14 y 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad en la aplicación de la ley. Derecho a la tutela judicial efectiva: disparidad de criterios en un mismo órgano juzgador.

**Precedentes jurisprudenciales:** En cuanto a la primera cuestión, véase la jurisprudencia citada en la sentencia anterior (90/90, de 23 de mayo). Respecto a la segunda, véase, por todas, la sentencia núm. 63/84, de 21 de mayo.

**Sentencia núm. 92/90, de 23 de mayo (núm. Reg. 280/88), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Gimeno Sendra.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Autos del Tribunal Central de Trabajo.

**Precepto de referencia:** Art. 24.1 de la CE.

**Cuestión analizada:** Derecho a la tutela judicial efectiva: excesivo formalismo y desproporción del órgano jurisdiccional ordinario al apreciar presupuestos procesales.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 57/1984, de 8 de mayo; 17/85, de 9 de febrero; 36/86, de 12 de marzo; 140/87, de 23 de julio; 177/89, de 30 de octubre, y 33/90, de 26 de febrero.

**Sentencia núm. 93/90, de 23 de mayo (núm. Reg. 294/88), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponentes:** Sres. García-Mon y González-Regueral.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Territorial (hoy Tribunal Superior de Justicia).

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 de la CE y 28.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

**Cuestión analizada:** Derecho a la tutela judicial efectiva: legitimación para recurrir una resolución administrativa.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 126/1984, de 26 de diciembre; 4/85, de 18 de enero, y 24/87, de 25 de febrero.

**Sentencia núm. 94/90, de 23 de mayo (núm. Reg. 475/88), «BOE» núm. 147,**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Actos impugnados:** Sentencias de Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.1 y 2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Tutela judicial efectiva. Derecho a la presunción de inocencia.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 174/1985, de 17 de diciembre; 175/85, de 17 de diciembre; 150/87, de 1 de octubre; 160/88, de 19 de septiembre, y 229/88, de 1 de diciembre.

**Sentencia núm. 95/90, de 23 de mayo (núm. Reg. 552/88), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponentes:** Sres. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Tutela judicial efectiva: derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho y que sea congruente.

**Precedentes jurisprudenciales:** Numerosísimos: sentencias núms. 20/82, de 5 de mayo; 14/85, de 1 de febrero; 109/85, de 8 de octubre; 177/85, de 18 de diciembre; 181/85, de 20 de diciembre; 5/86, de 21 de enero; 77/86, de 12 de junio; 116/86, de 8 de octubre; 1/87, de 14 de enero; 136/1987, de 22 de julio, y 68/88, de 18 de abril.

**Sentencia núm. 96/90, de 24 de mayo (núms. Reg. 252, 265, 276 y 279/85), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. De los Mozos y De los Mozos.

**Fallo:** Parcialmente estimatorio.

**Actores:** Parlamento de Cataluña, Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, Junta de Galicia y Consejo de Gobierno del País Vasco.

**Acto impugnado:** Determinados preceptos de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985.

**Preceptos de referencia:** Arts. 131.2, 134.2, 138, 142, 149.1.13.<sup>a</sup> y 18.<sup>a</sup>, 156.1, 157 y 158.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Competencias del Estado sobre la dirección de la actividad económica general y sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios, en relación con la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Límites formales a la extensión de la Ley de Presupuestos a la elaboración de proyectos de planificación económica general. Principio de suficiencia de las Haciendas locales. Competencia estatal de planificación económica general en conexión con el desarrollo regional. Fondo de Compensación Interterritorial: inconstitucionalidad de su uso para establecer un control por parte de la Administración del Estado sobre las Haciendas de las Comunidades Autónomas.

**Precedentes jurisprudenciales:** Por el gran número y amplitud de las cuestiones analizadas, muy abundantes. Entre los más significativos, las sentencias núms. 4/81, de 2 de febrero; 76/83, de 5 de agosto; 179/85, de 19 de diciembre; 29/86, de 20 de febrero; 63/86, de 20 de mayo; 152/88, de 20 de julio; 183/88, de 13 de octubre; 186/88, de 17 de octubre, y 201/88, de 27 de octubre.

**Sentencia núm. 97/90, de 24 de mayo (núms. Reg. 651/85 y 1.314/87), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponentes:** Sres. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

**Fallo:** Parcialmente estimatorio.

**Promotor:** Audiencia Territorial de Valencia.

**Actos impugnados:** Disposición Adicional segunda, apartado *a*), del Real Decreto-Ley 3/1983, y Disposición Adicional segunda de la Ley 9/1983, de 13 de julio, de Presupuestos Generales del Estado.

**Preceptos de referencia:** Arts. 9.3 y 50 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y restrictivas de derechos; interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Principio de adecuación de las pensiones: inexistencia de un carácter contractual sinalagmático en la relación de Seguridad Social.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sobre la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y restrictivas de derechos y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, las sentencias núms. 27/81, de 20 de julio; 6/83, de 4 de febrero; 42/86, de 10 de abril; 65/87, de 21 de mayo; 134/87, de 21 de julio, y 70/88, de 19 de abril. Sobre el principio de adecuación de las pensiones, las sentencias núms. 27/81, de 20 de julio; 103/83, de 22 de noviembre; 121/83, de 15 de diciembre; 65/87, de 21 de mayo, y 134/87, de 21 de julio.

**Sentencia núm. 98/90, de 24 de mayo (núm. Reg. 474/88), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Truyol Serra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la presunción de inocencia. Derecho a un proceso con todas las garantías: imparcialidad del órgano juzgador.

**Precedentes jurisprudenciales:** Respecto al primer punto, véanse los citados en la sentencia núm. 44/89, de 20 de febrero; en cuanto al segundo, sentencias núms. 145/88, de 12 de julio, y 11/89, de 24 de enero.

**Sentencia núm. 99/90, de 24 de mayo (núm. Reg. 800/88, «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Bereijo.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 de la CE y 1.710 de la LEC.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e inadmisión del recurso de casación; significado de las exigencias formales (en relación al requisito de habilitación de abogado); interpretación de las normas procesales más favorables a la efectividad del derecho.

**Precedentes jurisprudenciales:** Por todas, véase la sentencia núm. 117/1989, de 30 de octubre.

**Sentencia núm. 100/90, de 30 de mayo (núms. Reg. 722, 723 y 766/85; 1.309/86 y 853/89), «BOE» núm. 147.**

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Desestimatorio (voto particular del Sr. Rubio Llorente, al que se adhiere el Sr. Truylol).

**Promotor:** Audiencia Territorial.

**Acto impugnado:** Art. 12.a) y b) de la Ley de la Comunidad Foral de Navarra 21/84, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1985, y art. 14 de la Ley Foral 19/86, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1987.

**Preceptos de referencia:** Arts. 9.3, 14, 40.1 y 50 de la CE, y 49.1 y Disposición Adicional tercera de la LORAFNA.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad. Naturaleza de las prestaciones de la Seguridad Social. Concepto de «actualización periódica» de las pensiones.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia núm. 134/87, de 21 de julio, que resuelve un supuesto similar referido a la Ley 44/87, de Presupuestos Generales del Estado.



**Comentario:**

Al margen de reiterar jurisprudencia anterior acerca de la garantía de actualización periódica de las pensiones, es de interés destacar la interpretación que el Tribunal hace de la *cláusula subrogatoria* contenida en la disposición adicional tercera de la LORAFNA, según la cual la Comunidad de Navarra respetará los «derechos adquiridos» de los funcionarios de la extinta Diputación Foral a la que viene a sustituir: no cercena ni disminuye la competencia de dicha Comunidad sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos sin que la situación anterior deba permanecer congelada en el tiempo (cuestión sobre la que versa el voto particular).

**Sentencia núm. 101/90, de 4 de junio (núm. Reg. 508/88), «BOE» núm. 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Truyol Serra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Auto de Juzgado de Distrito.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Indefensión.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia 48/84, de 4 de abril.

**Sentencia núm. 102/90, de 4 de junio (núm. Reg. 542/88), «BOE» núm. 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De los Mozos y De los Mozos.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y principio de audiencia bilateral.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia núm. 66/88, de 14 de abril, y jurisprudencia allí citada.

**Sentencia núm. 103/90, de 4 de junio (núm. Reg. 617/88), «BOE» núm. 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Precepto de referencia:** Art. 14 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad ante la ley y aplicación analógica de las normas de manera más favorable a las exigencias de dicho principio.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 79/83, de 5 de octubre; 1/84, de 16 de enero; 109/88, de 8 de junio, y 253/88, de 20 de diciembre.

**Sentencia núm. 104/90, de 4 de junio (núm. Reg. 717/88), «BOE» núm. 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez-Piñero.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto de Juzgado de Primera Instancia.

**Preceptos de referencia:** Art. 17.1 y 4 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Libertad personal y *habeas corpus*.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia núm. 98/86, de 10 de julio.

**Sentencia núm. 105/90, de 6 de junio (núm. Reg. 1.695/87), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. López Guerra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Arts. 20.1.d) y 20.4 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Libertad de expresión e información *versus* derecho al honor de personas y autoridades públicas.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 104/86, de 17 de julio; 159/86, de 12 de diciembre; 165/87, de 27 de octubre; 6/88, de 8 de abril; 107/88, de 8 de junio, y 20/90, de 15 de febrero.

### **Comentario:**

Antes de entrar en el análisis del caso, el Tribunal resume los criterios que ha venido fijando, en su abundante jurisprudencia sobre la materia, para resolver los conflictos entre la libertad de información y el derecho al honor, cuando el órgano judicial realice la necesaria ponderación de tales derechos:

1) Diferente ámbito de protección de las libertades de expresión (relativa a juicios u opiniones que no empleen términos injuriosos) e información (relativa a la manifestación de hechos veraces);

2) Contribución a la formación de una opinión pública libre, en tanto se realice crítica a personalidades públicas;

3) Condición de profesional de la información, que realiza su tarea en la prensa, entendida en un sentido amplio, y

4) Especialmente, el criterio de veracidad, que obliga al periodista a un especial deber de comprobar su información.

Al concurrir en la conducta del periodista los tres últimos criterios citados, hay que partir del legítimo ejercicio del derecho a comunicar libremente información veraz. Sin embargo, el examen de algunos términos empleados en la emisión radiofónica llevan a plantearse si se ha ido más allá de los límites de ese derecho, ya que «la Constitución no reconoce un pretendido *derecho al insulto*»: junto a otros juicios, relativos a la conducta de que se informa, acerbos, pero que no incurren en la injuria, y que, por tanto, debe soportar quien ostente un cargo de relevancia pública, el Tribunal encuentra «expresiones, afirmaciones o calificativos claramente vejatorios, desvinculados de esa información, y que resultan proferidos gratuitamente, (...) sin la menor relación con la formación de una opinión pública libre», motivo por el cual el periodista se sitúa fuera del ámbito de protección constitucional de la libertad de expresión.

**Sentencia núm. 106/90, de 6 de junio (núms. Reg. 1.976, 2.176, 2.442, 2.491, 2.492, 2.535 y 2.593/89; 251 y 439/90), «BOE» núm. 160.**

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Promotor:** Tribunal Superior de Justicia.

**Acto impugnado:** Arts. 2 y 4, Disposición Adicional y Disposiciones Transitorias de la Ley Territorial 5/89, de 4 de mayo, de Reorganización Universitaria de Canarias.

**Preceptos de referencia:** Arts. 27.10 de la CE y 35.2 de la LOTC.

**Cuestiones analizadas:** Requisitos del Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Autonomía universitaria; significado, alcance y límites.

**Precedentes jurisprudenciales:** a) Requisitos del Auto de planteamiento de la CI: sentencia núm. 19/88, de 16 de febrero, y jurisprudencia en ella citada; b) En relación a la autonomía universitaria, sentencias núms. 26/87, de 27 de febrero, y 55/89, de 23 de febrero.

**Comentario:**

Antes de pronunciarse sobre el conjunto de argumentos en que se basa la cuestión, el Tribunal analiza la concurrencia en la misma de los requisitos que el ordenamiento exige para su planteamiento. Respecto al fondo del asunto, estima que no vulnera la autonomía universitaria la readscripción de centros universitarios llevada a cabo por la Ley canaria de Reorganización Universitaria por ser ésta decisión que sólo corresponde tomar al Estado o a las Comunidades Autónomas y no suponer «creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y la docencia», nota característica de dicha autonomía (entre otras), según el artículo 3.2 de la Ley de Reforma Universitaria. Por la misma razón, se desestima la alegación de inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley canaria que establecen los criterios de adscripción de los centros de nueva creación siguiendo la regla geográfica de «rectorado más próximo», ya que a la Universidad le compete «única y exclusivamente instar o solicitar su creación».

**Sentencia núm. 107/90, de 6 de junio (núm. Reg. 1.393/90), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo electoral.

**Ponente:** Sr. Rubio Llorente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Partido político.

**Actos impugnados:** Resoluciones de Juntas Electorales y sentencias de Tribunal Superior de Justicia.

**Preceptos de referencia:** Arts. 23.2 de la CE; 8.1 y 13.5 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y 2.1 y 4.1 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

**Cuestiones analizadas:** Derecho de participación política; inelegibilidades para la condición de parlamentario autonómico andaluz.

**Precedentes jurisprudenciales:** Resuelve un supuesto idéntico al planteado en la sentencia núm. 60/87, de 20 de mayo, referido a la Comunidad Autónoma de Extremadura.

**Sentencia núm. 108/90, de 7 de junio (núm. Reg. 1.697/87), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Actos impugnados:** Auto del Tribunal Central de Trabajo y sentencia de Magistratura de Trabajo.

**Precepto de referencia:** Art. 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y doble instancia. Incongruencia de las resoluciones judiciales.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 28/87, de 5 de marzo; 142/87, de 23 de julio, y jurisprudencia allí citada.

**Sentencia núm. 109/90, de 7 de junio (núm. Reg. 1.697/87), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo electoral.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Partido político.

**Acto impugnado:** Acuerdo de Junta Electoral Provincial.

**Preceptos de referencia:** Art. 23.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho de participación política; denegación de proclamación de candidatura.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 59/87, de 19 de mayo; 69/87, de 21 de mayo; 107/90, de 6 de junio.

**Sentencia núm. 110/90, de 18 de junio (núm. Reg. 1.463/87), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De los Mozos y De los Mozos.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Actos impugnados:** Acuerdos y sentencia de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 y 25.1 de la CE; 258 de la LECr., y art. 447 y ss. de la LEC.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados; tipos de responsabilidad y posibilidad de control jurisdiccional de los acuerdos sancionadores.

**Comentario:**

Recurso de naturaleza mixta por cuanto se impugna, por un lado, los acuerdos sancionadores impuestos al recurrente, y por otro, la sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa que conoció del recurso contra aquéllos interpuesto.

Respecto a la presunta lesión de la tutela judicial efectiva por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que declaró la inadmisibilidad del recurso, no se aprecia tal vulneración, ya que la precitada sentencia fue dictada sobre la base de que los acuerdos sancionadores recurridos son «actos de carácter judicial», y la jurisdicción contenciosa no puede conocer de los mismos. Para llegar a esta conclusión, el TC entra a analizar dichos acuerdos sancionadores, y estima que, desde la aprobación de la LO 6/85, del Poder Judicial, coexisten dos tipos de responsabilidad de jueces y magistrados, y cuya funcionalidad y naturaleza son bien distintas: la llamada «responsabilidad disciplinaria-jurisdiccional o procesal», que atiende a la corrección de las faltas u omisiones cometidas por los funcionarios judiciales, con ocasión de los actos y procedimientos judiciales, y la «responsabilidad disciplinaria gubernativa», que atiende a la forma y condiciones en que son cumplidos por los funcionarios los deberes a que están sujetos por el cargo que ostentan.

Esto explica que sean distintas la autoridad y órgano competente para ejercitar la potestad disciplinaria, reseñándose que sólo en el caso de las sanciones disciplinarias gubernativas es posible acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa para su revisión jurisdiccional. Teniendo en cuenta que las correcciones disciplinarias impuestas al recurrente lo fueron en aplicación de los artículos 258 LECr, en relación con el 447 LEC y concordantes, «responsabilidad disciplinaria jurisdiccional», preceptos no derogados por la LOPJ, es incuestionable que la sentencia de instancia no incurre en ninguna vulneración de derechos fundamentales.

Respecto a la conculcación del artículo 25.1 de la CE, por haber sancionado en aplicación de unas normas derogadas por la LOPJ, sólo señalar que esto no es cierto, como ya quedó expuesto en la argumentación anterior.

En cuanto a la posible vulneración del artículo 24.1 de la CE, por la imposición de las correcciones disciplinarias de plano, sin haber precedido el inexcusable trámite de audiencia previa, tampoco es aceptado por la Sala, ya que consta que el recurrente solicitó de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial ser oído en justicia, a fin de formular oposición a las sanciones impuestas, audiencia que concretó en su demanda incidental, desestimada por sentencia.

**Sentencia núm. 111/90, de 18 de junio (núm. Reg. 442/88), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De los Mozos y De los Mozos.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Presunción de inocencia; desvirtuación sobre la base de prueba indiciaria.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 174/85, de 17 de diciembre; 169/86, de 22 de diciembre.



**Sentencia núm. 112/90, de 18 de junio (núm. Reg. 615/88), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Bereijo.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Acuerdo de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Arts. 14 y 25.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad y trato distinto de situaciones diferentes. Admisibilidad de la doble sanción penal y administrativa.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 77/83, de 3 de octubre, y 159/85, de 27 de noviembre. También, los Autos 150/84, 721/84 y 781/1985.

**Sentencia núm. 113/90, de 18 de junio (núm. Reg. 663/88), «BOE» número 160.**

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Caja de Ahorros.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 y 24.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Tutela judicial efectiva; el cumplimiento de los requisitos procesales es tema de orden público.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 185/87, de 18 de noviembre; 33/89, de 13 de febrero.

**Sentencia núm. 114/90, de 21 de junio (núm. Reg. 1.601/87), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente (voto particular del Sr. García Mon, al que se adhiere el Sr. Gimeno Sendra).

**Fallo:** Parcialmente estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 y 121 de la CE; 292 y ss. de la LOPJ y 903 y ss. de la LEC.

**Cuestiones analizadas:** Tutela judicial efectiva; necesidad de agotar los recursos para la exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 36/84, de 14 de marzo; 40/88, de 10 de marzo; 50/89, de 21 de febrero, y 128/89, de 17 de julio.

**Comentario:**

El Tribunal Constitucional afirma que la necesidad de agotar los recursos existentes antes de solicitar del Tribunal Supremo el reconocimiento del error judicial es una exigencia que no se puede excusar alegando que la sentencia que lo produjo fue anterior a la promulgación de la LO 6/85, del Poder Judicial.

Dicho esto, el Tribunal Constitucional reconoce que el Tribunal Supremo, en este caso, ha actuado de forma demasiado formalista en la exigencia del cumplimiento de los presupuestos procesales. La necesidad de interponer recurso de aclaración por parte del demandante se hacía innecesaria en cuanto que ya había sido pedida por el acusado.

**Sentencia núm. 115/90, de 21 de junio (núm. Reg. 286/88), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad Cooperativa.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 y 117.3 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Tutela judicial efectiva; la ausencia de firma de procurador es requisito formal al que debe darse oportunidad de subsanación.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 57/84, de 8 de mayo; 7/87, de 19 de enero, y 105/89, de 8 de junio.

**Sentencia núm. 116/90, de 21 de junio (núm. Reg. 393/88), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Gimeno Sendra.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 de la CE, 11.3 de la LOPJ, 1.710 de la LCE y 22 del Estatuto General de la Abogacía.

**Cuestiones analizadas:** Tutela judicial efectiva. Criterios interpretativos de los requisitos formales favorables a la subsanación.

**Precedentes jurisprudenciales:** Véase la nota jurisprudencial de la STC núm. 115/90, de 21 de junio.

**Sentencia núm. 117/90, de 21 de junio (núm. Reg. 424/88), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Art. 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Tutela judicial efectiva; error judicial en el emplazamiento del demandante.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 70/84, de 11 de junio; 72/85, de 16 de diciembre; 112/87, de 2 de julio.

**Sentencia núm. 118/90, de 21 de junio (núm. Reg. 660/88), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Gimeno Sendra.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 24.1 de la CE y 22 del Estatuto General de la Abogacía.

**Cuestiones analizadas:** Tutela judicial efectiva; la ausencia de habilitación de letrado no es un requisito formal insubsanable.

**Precedentes jurisprudenciales:** Véase la nota jurisprudencial de las sentencias núms. 115/90, de 21 de junio, y 116/90, de 21 de junio.

**Sentencia núm. 119/90, de 21 de junio (núm. Reg. 507/90), «BOE» número 160.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rubio Llorente.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actores:** Parlamentarios de la coalición H. B.

**Acto impugnado:** Decisión del presidente del Congreso de los Diputados.

**Preceptos de referencia:** Arts. 9.1, 14, 23.2 y 72.1 de la CE, y 20.3 del RC.

**Cuestiones analizadas:** Acceso en condiciones de igualdad a cargos públicos. Adquisición plena de la condición de diputado. Validez jurídica de las resoluciones del presidente del Congreso de los Diputados.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 101/1983, de 18 de noviembre; 122/83, de 16 de diciembre; 8/85, de 25 de enero; 32/85, de 6 de marzo, y 24/90, de 15 de febrero.

**Comentario:**

Tema de gran repercusión política, que plantea tres cuestiones principales: *a)* Validez jurídica de la resolución del presidente del Congreso de los Diputados, que establece la fórmula para acatar la Constitución; *b)* Si la decisión que deniega la condición plena de diputados a los miembros de la coalición H. B. es materialmente contraria a los artículos 14 y 23.2 de la CE, y *c)* El requisito formal de acatar la Constitución conforme a una fórmula preestablecida.

Estas cuestiones son desarrolladas por el Tribunal Constitucional sobre una premisa inicial que recoge de su propia jurisprudencia: la licitud constitucional de la exigencia de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución como requisito para el acceso a los cargos y funciones públicas.

En cuanto a la primera de las cuestiones —validez de la resolución de la Presidencia del Congreso—, remitiéndose a jurisprudencia anterior del propio Tribunal, hace constar la suficiencia de los Reglamentos parlamentarios para regular materias sometidas en nuestra Constitución a reserva de ley.

Por tanto, la siguiente cuestión estará en determinar si se pueden estimar equivalentes Reglamentos parlamentarios y resoluciones dictadas por la Presidencia de las Cámaras; aquí, nuevamente haciéndose eco de anterior jurisprudencia, señala que estas resoluciones dictadas por el presidente de la Cámara, al amparo del artículo 32.2 del RC, se integran en éste y adquieren el mismo valor que el resto de su contenido. Dicho esto, el Tribunal Constitucional entra en una interesante y polémica matización sobre el valor de estas resoluciones, indicando que la equiparación de las resoluciones del presidente del Congreso a los preceptos del Reglamento no es una equiparación desde todos los puntos de vista y a todos los efectos, ya que el Reglamento está sometido a unas exigencias en su aprobación y reforma —artículo 72.1 CE—, que, evidentemente, no tienen estas resoluciones. Por ello, tal facultad del presidente sólo es admisible cuando se utilice para suplir omisiones del Reglamento o para interpretarlo, no para desarrollarlo o especificar sus prescripciones. Sentado lo anterior, la cuestión estará en determinar qué alcance y contenido hay que dar, respectivamente, a la interpretación y a la especificación de los preceptos reglamentarios.

En cuanto a la segunda de las cuestiones, el Tribunal Constitucional desecha la alegación de violación del artículo 14 de la CE, ya que, como dice el propio Tribunal, la fórmula es ideológicamente neutral y, por tanto, no existe discriminación alguna por esta razón. Mayor complejidad tiene el dilucidar si se ha inculcado el derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23.1 CE). La cuestión se suscita, ya que la resolución de la Presidencia se tomó y se aplicó una vez iniciada la legislatura, con la consiguiente afectación a unos diputados y no a otros. El Tribunal entiende que la resolución de la Presidencia no desarrolla o especifica lo dispuesto en el Reglamento, sino que cubre una omisión, y es por ello por lo que no se da un trato discriminatorio: tanto los afectados como los no afectados por la resolución están sujetos a la misma norma que exige acatar la Constitución; otra cosa es la constitucionalidad o no de la interpretación rigurosa y formalista que hace el presidente del Congreso, y que ahora pasamos a estudiar.

Esta tercera cuestión —sin duda, es el tema central de la sentencia— analiza si la decisión del presidente del Congreso, al rechazar la fórmula adoptada por los recurrentes —añadiendo la expresión «por imperativo legal»— ha conculcado el artículo 23.2 de la CE. Para aclarar esta cuestión lo primero que tenemos que tener en cuenta es la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, señalando que toda ley que desarrolle derechos fundamentales debe interpretarse de manera que maximalice la eficacia de tales derechos. Es por ello que el Tribunal señala que no resulta congruente una inter-

pretación de la obligación de prestar el acatamiento a la Constitución que anteponga un formalismo rígido a esa maximalización de la eficacia del Derecho. Es más, nos encontramos ante una añadidura que no pone ningún límite o condición a la promesa, y, por el contrario, con la fórmula rígida de acatamiento estamos dando mayor relevancia a una interpretación constitucional excluyente frente a otra integradora que es más conforme con los valores que en ella se señalan.

**Bibliografía:**

SANTAOLALLA, Fernando: «El juramento y los Reglamentos parlamentarios (Comentario a la STC 119/90, de 21 de junio)», en *RDC*, núm. 30, 1990.

**Sentencia núm. 120/90, de 27 de junio (núm. Reg. 443/90), «BOE» número 181.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponentes:** Sres. García Mon, Díaz Eimil y Gimeno Sendra (votos particulares de los Sres. Rodríguez-Piñero y Leguina Villa).

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actores:** Reclusos del GRAPO en un centro penitenciario.

**Acto impugnado:** Auto de la Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Arts. 15, 16, 17.1 y 18.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la vida y a la integridad física; asistencia médica obligatoria a reclusos en huelga de hambre.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 53/1985, de 11 de abril; 2/87, de 21 de enero, y 89/87, de 3 de junio.

**Comentario:**

El Tribunal Constitucional plantea el problema como un conflicto que esencialmente se produce entre el supuesto derecho de los huelguistas al ejercicio de su derecho de libertad hasta el extremo, incluso de ocasionar su propia muerte, sin injerencia ajena alguna, y el derecho-deber de la Admi-

nistración penitenciaria de velar por la vida y salud de los internos sometidos a custodia.

El Tribunal comienza expresando que ha de entenderse el derecho a la vida con un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. En este sentido, la propia muerte se integra fácticamente en el círculo de libre disposición de la persona, pero de ningún modo se puede entender configurado como un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir ni mucho menos un derecho subjetivo de carácter fundamental.

Desvirtuado el derecho a la propia muerte, que se quiere ver en el artículo 15 CE, el Tribunal Constitucional hace lo propio con los alegatos de que han producido tratos inhumanos y degradantes, vulneración de la libertad ideológica y la libertad del artículo 17.1 de la CE.

Se concluye el caso desestimando el recurso sobre la base del argumento que sigue: «... una cosa es la decisión de quien asume el riesgo de morir en un acto de voluntad que sólo a él afecta, en cuyo caso podría sostenerse la ilicitud de la asistencia médica obligatoria o de cualquier otro impedimento a la realización de esa voluntad, y cosa bien distinta es la decisión de quienes, hallándose en el seno de una relación especial penitenciaria, arriesgan su vida con el fin de conseguir que la Administración deje de ejercer o ejerza de distinta forma potestades que le confiere el ordenamiento jurídico...».